

Seguro de desempleo:

Gobierno, empresarios y trabajadores deben ponerse de acuerdo

El programa se encuentra en una etapa de estudio y discusión que involucra al gobierno, trabajadores y empleadores. Se trata de una medida protectora de los trabajadores especialmente del sector privado.



Ministro de Trabajo, Dr. Luis Vasquez V.

Fuente: Ministerio de Trabajo

Redacción Central

Dentro de la tradicional concepción de la seguridad social y los principios de la OIT, el seguro de desempleo tiene por lo general tres financiadores, el Estado, el empleador y el trabajador. Es el tripartidismo el que aparentemente debe financiar este tipo de seguros, en los hechos, sin embargo, el Estado se exime de aportar debido a su extrema pobreza. En la situación del empleador sus aportes no son más que una forma que adopta el salario o la remuneración del trabajador, por lo tanto, si va a destinar recursos para el seguro de cesantía necesariamente provendrá de la masa destinada al pago de salarios. De otra manera estaría aumentando sus costos lo cual, aparte de generar una resistencia natural introduce elementos que afectan la competitividad. En última instancia, el que efectivamente pagará la prima del seguro será siempre el trabajador y, en este caso ya es objeto de una serie de deducciones de su reducido salario.

La propuesta

El Seguro de Desempleo, una propuesta del Ministerio de Trabajo lanzada el mes pasado a consideración de trabajadores y empleadores, consiste en el pago de una remuneración mensual a quienes hubieran perdido el empleo por razones ajenas a su voluntad.

Aunque la propuesta aun se encuentra en estudio en la unidad denominada "Programa de Modernización de las Relaciones Laborales", sin embargo, se puede afirmar que al menos ya existe la idea gruesa del proyecto. Su

financiamiento no constituirá una obligación para el Estado, por el contrario se piensa en la creación de un fondo generado con recursos del mismo programa sobre la base de descuentos a los salarios u otras alternativas decantadas de experiencias logradas en otras latitudes.

A la fecha, dice el Ministro de Trabajo, Luis Vásquez Villamor, el programa tiene un cronograma de trabajo que se encuentra condicionado por el consenso que se pueda lograr o no entre los interesados, es decir, trabajadores y empleadores. Si todo marcha sobre ruedas y se logra solidez y consenso en torno a la idea, entonces, "esto dará lugar al nacimiento de una nueva conquista para los trabajadores que les dará el derecho a percibir un salario en tiempos en los que está privado de trabajar".

El programa ya ha empezado a desarrollarse con la fase llamada de "explicación" de las experiencias adquiridas en algunos países de América Latina, logrado a partir del seminario internacional realizado en febrero, donde participaron expertos en seguro de desempleo.

Este programa, dice el Ministro de Trabajo, ya se encuentra en pleno debate, éste se ve reflejado en los medios de comunicación, donde la gente empieza a informarse y discute sus criterios sobre el tema.

La idea se mantendrá como proyecto en tanto no se logre el ansiado consenso para

luego "llegar a un producto legislativo escrito", pues se trata de un proceso largo y complicado que debe ser alimentado por los aportes y sacrificio de todos (gobierno, empresarios y trabajadores), quienes deben estar alejados de intereses excluyentes que neutralizan el desarrollo de la propuesta, si esto no sucediera, el programa no podrá funcionar, explica Vásquez.

Se asegura que la propuesta de implantar el Seguro de Desempleo ha logrado interesar a los diversos sectores. Tanto empresarios como trabajadores habrían mostrado su interés por conocer mayor información sobre la propuesta, "la idea es



La propuesta consiste en el pago de una remuneración mensual a quienes hubieran perdido el empleo por razones ajenas a su voluntad.



hacer una suerte de equilibrio y no un juego de suma cero", pues no se trata que "el trabajador agarre todo lo que el empleador vaya a perder, sino de fijar un aporte -en el marco de un pacto solidario- que permita constituir el fondo que financie el Seguro por Desempleo.

Rodolfo Eróstegui, coordinador ejecutivo del programa explica que la propuesta apunta a que los trabajadores en paro forzoso cuenten con un salario que les permita subsistir un período determinado. En el mismo, los interesados podrán adquirir nuevas destrezas que les permita luego reinsertarse en el sector productivo o de servicios. Esto no excluye el estudio de otras alternativas destinadas a dar coherencia al seguro de desempleo.

Según el Ministro de Trabajo, se tomará en cuenta tanto al sector público como al privado, sin desconocer las diferencias que los separan. Se considera que el sector público no llegará a ser un gran usuario del seguro de desempleo como efecto de la inminente aprobación del Estatuto del Funcionario Público. Una norma que aprueba el sistema carrera como principio rector y garantiza la inamovilidad en los puestos de trabajo, en cambio, el seguro de desempleo podrá desarrollarse en el sector privado en el que los trabajadores continuarán sometidos al sistema de libre contratación.

Mediante la aprobación del Estatuto, la administración pública se mantendrá sobre la base de una burocracia política y técnica, que se irá perfeccionando en el tiempo. En consecuencia, se espera un mejoramiento en la calidad del servicio público debido a la especialización de todos los funcionarios en sus respectivas áreas de trabajo, la drástica disminución de la corrupción y evitará que los partidos políticos utilicen la administración pública como un botín de guerra ■

Experto venezolano: El Seguro por Paro es un círculo virtuoso contra la pobreza

El Seguro por Paro venezolano ha sido concebido para favorecer a los trabajadores que, por motivos ajenos a su voluntad, han perdido sus fuentes de empleo, consiste en un subsidio proveniente de un fondo expresamente creado mediante el descuento de 2,50% sobre el salario de cotización.

Los empresarios contribuyen al fondo con el 75% y los trabajadores con el 25%, este cálculo se efectúa para remuneraciones equivalentes a un total de 20 salarios mínimos, esto quiere decir, que los trabajadores en paro (excluye a los desocupados) reciben como subsidio mensual el 80 por ciento del salario mínimo nacional. El salario mínimo en Venezuela alcanza a 120.000 bolívars (183 dólares).

De acuerdo a la exposición del abogado laboralista venezolano, Luis Arismendi Anuel, quien llegó invitado al país, para disertar en el Seminario sobre Seguro de Cesantía organizado por el Ministerio de Trabajo, el seguro por paro tiene que ver con un enfoque destinado a construir una economía más sana.

Quienes perciben el subsidio por paro forzoso deben seguir cursos de reorientación y capacitación laboral (organizados por el Ministerio de Trabajo) durante los primeros seis meses de paro. El Estado precisa capacitar a sus trabajadores, dotarle un servicio de intermediación laboral eficiente y transparente. Asimismo, asegurar a los trabajadores un ingreso

durante su período de cesantía que impida la reducción de su capacidad de compra. Este proceso fue calificado por Arismendi como un círculo virtuoso de lucha efectiva contra la pobreza.

Para los venezolanos el reto consiste en aplicar un sistema de información adecuada y transparente, que permita discriminar entre los trabajadores informales, los desocupados, los cesantes, determinar sus habilidades, sus potencialidades, etc. Se trata de crear un sistema de información confiable para conocer cuales serán las líneas gruesas y delgadas del problema para precisar la situación de la masa laboral del país y evitar las dificultades que tienen que ver con una propensión a preferir el seguro por paro, sin necesitarlo.

El seguro por cesantía tiene factibilidad, cumple con la necesidad de crear un sistema que ofrezca garantías y protección al trabajador en un mundo cada vez más cambiante y complicado, explica el experto.

Si bien el programa podría ser mirado con poco entusiasmo por los empleadores, por esto mismo, se precisa un marco del consenso entre los actores. En todo caso, la discusión no debiera ser circunscrita a los costos del seguro, sin considerar los parámetros sociales sobre los cuales se asienta el desarrollo y en torno al cual tanto el estado, los trabajadores como los empresarios deben ponerse de acuerdo ■